

REVISTA

Edición No. 269

Mayo/23/2011

INSURRECCIÓN



Contenido

EDITORIAL 3
La Salud en Coma 3

Lloviendo Sobre Mojado 8
Autor: Revista Insurrección

C.P.I. Otro Organismo al Servicio del Imperialismo 13
Autor: Ramiro Vargas

COMUNICADO:
Golpe al Narco Paramilitarismo 18
Autor: Frente Urbano Carlos German Velasco Villamizar



EDITORIAL

La Salud en COMA

La salud es un derecho constitucional de los colombianos, fue convertida en una mercancía por la élite dominante para favorecer el enriquecimiento de unos pocos, a costa de la humillación, el dolor y la muerte de los más pobres y el saqueo del presupuesto de la Nación.

La salud como negocio

La ley 100 de 1993, de la cual fue su ponente el ex-senador Álvaro Uribe Vélez, fue hecha dentro de los dictados de la

doctrina neoliberal, liberando al Estado de sus obligaciones sociales y se traslada a la esfera de los negocios privados, cuyo único fin es obtener el máximo de ganancia, reduciendo los costos de operación y obteniendo gabelas del Estado.

Con esta Ley se elimina la Salud Pública, se entrega el manejo de los recursos públicos destinado a la salud a inescrupulosos traficantes, se establece un Plan Obligatorio de Salud (POS) que señala los servicios y medicinas que deben cubrir, las Empresas





Feria de corruptos

Desde los primeros años de la ley, surgieron problemas delictuosos, como la afiliación doble, mediante la cual las EPS duplican los 50 mil pesos que paga el Estado por cada afiliado.

Enterrado el Instituto Colombiano de los Seguros Sociales (ISS), el ente regulaba el mercado, las EPS fueron reduciendo y poniendo trabas a la prestación de determinados servicios, negando algunos, alegando que no estaban contemplados en el POS; recortando el tiempo del médico para atender el paciente; sacando el quite a los servicios especializados; sometiendo los pacientes a turnos infames; entregando medicinas de bajo costo y negando las especializadas por costosas.

Los pacientes debieron cubrir con su propio dinero, en los últimos dos años, 18 billones de pesos, por medicamentos y enfermedades pertenecientes al régimen contributivo y subsidiado, que las EPS se negaron a asumir; además muchos usuarios tienen que recurrir al mecanismo

judicial de Tutela, para que cubran los servicios especializados más costosos.

El gobierno invierte anualmente más de 28 billones de pesos, un 6 por ciento del PIB, en salud; de esta suma las EPS se roban una millonada cada año, bajo diferentes modalidades: en un billón de pesos contabiliza la Superintendencia de Salud el sobreprecio a medicamentos contemplados en el POS, en los no incluidos, la sobrefacturación ascendió entre 2007 y 2009 a 70 mil millones de pesos; además de cobro de servicios no prestados a personas que están muertas o afiliadas que no reciben servicios.

Las IPS se convirtieron en instituciones criminales, negando los servicios y sometiendo los pacientes al famoso paseo de la muerte.

Las autoridades que están investigando a las EPS han detectado robos al sistema de salud, que podría ascender a 300 mil millones; algunos analistas calculan que el sistema de salud pierde cada año 400.000 millones de pesos; han descubierto también que varias EPS e IPS sólo existían en los papeles, para simular la atención a pacientes falsos y para cobrarle al Estado.

El presidente Santos en una entrevista afirmó que "las EPS y laboratorios estarían inflando entre 40 y 700 por ciento los precios de los medicamentos y dispositivos que son recobrados al Fondo de Solidaridad y Garantía (Fosyga)".

La salud y el poder

Las 14 EPS más grandes, que representan el 85 por ciento del total, se han agremiado en ACERMI, desde donde manejan de común acuerdo los distintos aspectos pertenecientes al negocio de la salud, ejercen presiones para que el gobierno tome decisiones que les favorezca y ejercen influencia mediática sobre las comunidades.

El sistema de salud actual es una estructura mafiosa, articulada con los gobernantes de turno y el parlamento. La salud se volvió un botín de guerra disputado por los diferentes grupos de narco paramilitares: La gata Emilse López fue la testaferra que pusieron a manejar la salud en la costa Atlántica; el tuerto Gil se adueñó del sistema de salud del oriente colombiano y la mayoría de los narco-paracos montaron sus propias EPS e IPS en varias regiones del país.

La emblemática SALUDCOOP

En la investigación que están haciendo a las EPS, las autoridades han encontrado anomalías delictivas y estados de iliquidez; entre estas sobresale SALUDCOOP, que ha sido intervenida y suspendieron su gerente, que ganaba 90 millones mensuales. Esto muestra la corruptela de las EPS e IPS.

SALUDCOOP, es la más grande EPS, participa en el mercado del régimen contributivo con el 30 por ciento, tiene 3'978.822 afiliados, en 1.050 municipios. El capital inicial que fue de 2.700 millones de pesos para el 2006 ascendió a 362.000 millones y ventas por 1,3 billones. En el 2009 el Boston Consulting Group la llegó a considerar "como una de las cinco multinacionales colombianas que hacían parte de las cien empresas más grandes de Latinoamérica, que mueve 2,5 billones de pesos al año".

La Superintendencia de Salud descubrió que SaludCoop había utilizado los recursos públicos con otros fines; que tiene inversiones por 5.000 millones de pesos sin soportes, entre 2004 y 2005 invirtió 320 mil millones de pesos en Panamá, República Dominicana, en Hoteles y en otras actividades ajenas a la sa-

lud; que adeuda a IPS más de 370.000 millones, al sector financiero 300.000 millones; que ha sobrefacturado medicamentos por más de 825 mil millones y contribuyó a la campaña presidencial de Álvaro Uribe Vélez.

Crisis del sistema de Salud privado

A mediados del año anterior hizo crisis el sistema de salud, el gobierno lo caracterizó como financiera, ocultando la verdad al dejar de lado el análisis de los problemas relacionados con la prestación de los servicios y los escándalos por corrupción.

La crisis ha sido provocada por la corrupción, el destino dado a los dineros de salud a otras actividades, el desprestigio ocasionado por deficiencias en el servicio a los usuarios, que para reducir costos, desmejoran la atención a los enfermos, ocasionan muertes, aumentando las cuotas del régimen contributivo y subsidiado del gobierno.

Para salvar el sistema de salud, el Presidente Uribe delegó en personas cercanas a las EPS los estudios que sirvieron de base a las medidas tomadas. Declaró el Estado de Emergencia Social y a la sombra de ésta promulgó decretos-ley en sintonía con lo que las EPS esperaban: refinan-

ciar el sistema con nuevos ingresos y reducir de servicios a los usuarios. La Corte Constitucional le echó para atrás la Emergencia por inconstitucional.

La crisis bajo el mandato de Santos

El gobierno de Juan Manuel Santos aprobó en enero la ley 1438 del 2011, que reforma el sistema de salud, dando continuidad y prioridad al enfoque económico basado en el costo-beneficio, reduciendo la prestación a los usuarios. Los escándalos de corrupción que el país ha conocido asombrado e iracundo, de nada sirvieron para replantear el actual sistema de salud.

El Estado constitucionalmente debe garantizar la salud de los colombianos; pero sabemos que la élite dominante no mueve un dedo para cumplir el mandato.

Nos corresponde a las mayorías de la nación hacer valer este derecho, luchando por que el sistema de salud regrese a manos del Estado y éste lo atienda con sentido humanista, gratuito, científico, responsable y transparente.

Sumemos fuerzas y esfuerzos y unidos vayamos a la lucha callejera a exigir los derechos del pueblo y soluciones a sus necesidades vitales.



LLOVIENDO SOBRE MOJADO

Autor: Revista Insurrección

Otra vez el general invierno vuelve a ser el verdugo del martirizado pueblo colombiano. Además de la crisis humanitaria que se padece por culpa del terrorismo de Estado, también se sufre la crisis ambiental.

Todos los años se repiten las inundaciones, los derrumbes, las avalanchas; las pérdidas de

cosechas, viviendas humildes, animales; la destrucción de carreteras, puentes, diques, jarrillones; las muertes, desaparecidos, heridos y desplazados; la caridad pública y la solidaridad internacional para las víctimas y los subsidios estatales para los gremios; los anuncios gubernamentales que se tomarán serias medidas para evitar que se repita la tragedia. Pero cada año, la devastación es mayor.

Sistema depredador

No falta quien atribuya las causas de estas desgracias a la furia divina, por lo pecadores que somos o a las borracheras de San Pedro. También los hay, que cargan la responsabilidad a la despiadada naturaleza. Pero, la naturaleza tiene sus ciclos y responde a las alteraciones ocasionadas por la depredación, contaminación y sobre explotación industrial.

El afán de lucro y la acumulación de riquezas del sistema capitalista, está acabando con la vida en el planeta. Se están destruyendo los ecosistemas y el equilibrio ambiental. Se están agotando los recursos no renovables y los renovables se explotan con tal intensidad que se impide su renovación. El creciente agujero de la capa de ozono trae consecuencias irreparables para todas las formas de vida. El sobrecalentamiento del planeta por la emisión de gases de la combustión industrial, está alterando todos los climas, haciendo más intensos los veranos y los inviernos, en lo que han llamado inapropiadamente los fenómenos de "El Niño" y "La Niña".

Se ha alterado el ciclo hidrológico y el equilibrio hidrodinámico.

Se han destruido los bosques y se ha deforestado todas las cuencas hidrográficas. Se han secado y rellenado las ciénagas, humedales, pantanos, esteros, raudales. Se hacen represas inundando vastos territorios. Los agroquímicos fomentan la contaminación y la erosión.

Por eso, los inviernos más fuertes, se vuelven más destructivos. Las montañas peladas se derrumban, se forman represas que luego estallan con más fuerza, las aguas se salen de sus canales y las inundaciones cada vez llegan más lejos, las contenciones artificiales son barridas, las poblaciones ribereñas son arrasadas, las víctimas siempre son los más pobres, que se ven obligados a habitar esas zonas de alto riesgo, en el campo y la ciudad.

Toda esta devastación a nombre del progreso y el "desarrollo". Para los usos agrícolas y sobre todo ganaderos, para planes habitacionales, para megaproyectos industriales, mineros o energéticos. Los países desarrollados son los mayores responsables de esta catástrofe, pero se niegan a aceptar los controles y medidas que han establecidos las cumbres ambientales.





Gobiernos criminales

La oligarquía colombiana siempre ha estado al servicio de los intereses extranjeros y del gran capital. Todos los gobiernos han tenido la misión servil de entregar nuestros recursos naturales, sin importarles los daños ambientales y sociales.

Desde 1989 se crea el Sistema Nacional de Prevención y Atención de Desastres, pero no realiza ninguna actividad preventiva, sino que se dedica a pedir limosnas ante cada invernada y a robarse la solidaridad que ofrecen otros países. A los damnificados, escasamente les socorren algún mercadito y alguna frazada, para tomarse la foto publicitaria. Deberían aprender de Cuba, donde cada año se implementan planes de contingencia, para mover millones de personas y resguardarlas del paso de los huracanes o, de Venezuela, donde se vienen adelantando planes de reubicación poblacional, con asignación estatal de viviendas subsidiadas y nuevas formas de trabajo.

En el año 2.000 los damnificados se acercaban a 300.000 personas, ahora ya sobrepasan los 3, 5 millones. Antes, las muertes se contabilizaban en decenas, ahora son centenares. Pero, los gobiernos siguen indiferentes ante estas calamidades sociales y se muestran muy eficaces para indemnizar las pérdidas de los gremios económicos.

La tragedia invernal se toma como una excelente oportunidad para realizar jugosos negocios y para apropiarse del erario público. Para la muestra, el último botón de Juan Manuel Santos, quien en diciembre pasado declara el Estado de Emergencia y dicta otra avalancha de decretos, para recoger cerca de 10 billones de pesos y no tuvo empacho para ordenar la venta de otro 10 por ciento de Ecopetrol,

que afortunadamente fue echado atrás por la Corte Constitucional.

La crisis vial

La corrupción y la ingobernabilidad han colocado a Colombia, muy cercano a Bolivia, como los países con la peor infraestructura vial de América Latina. Pero, con el invierno de finales del 2.010 y lo que va corrido de la presente Niña, con toda seguridad que ya ocupamos el último lugar.

No hay carretera que no haya sido afectada por los derrumbes, la mayoría de las vías primarias han perdido kilómetros de pavimento, las carreteras secundarias y terciarias se han vuelto caminos de herradura. En cada invierno, son incontables los accidentes, la incomunicación entre las regiones y muchas zonas y poblados quedan aislados por largo tiempo.

Los proyectos viales son un escenario donde se cometen los mayores actos de corrupción. Se volvió costumbre que una obra termina costando tres veces el costo de la licitación y siempre la calidad de los materiales son inferiores a los especificados en los contratos. Muchas obras se entregan sin ser terminadas, otras ni siquiera se comienzan.

Los contratistas son verdaderas mafias emparentados con los gobernantes y durante los gobiernos de Uribe, los principales contratistas eran testaferros de los narco paramilitares, como es el caso de los Nule.

La administración de Uribe presentó el plan para recuperar 2.500 kilómetros de vías secundarias y terciarias y para la construcción de "las 5 autopistas de la competitividad", que unirían a Colombia con los mercados externos y, para esas obras se presupuestaron 69 billones de pesos. Los recursos que se llegaron a asignar, fueron a parar a los bolsillos del carrusel de la contratación mafiosa.

Desde 1993 se entregaron en concesión las principales carreteras, para usufructo de particulares. Por esto, en Colombia se pagan los peajes más caros del mundo: Según el Banco Mundial, el promedio del costo por kilómetro recorrido, en los países en desarrollo es de 5,1 centavo de dólar, en los países desarrollados es de 5,5 centavos de dólar y en Colombia es de cerca de 10 centavos de dólar. Los contratistas obtienen ganancias cercanas al billón de pesos al año, pero no cumplen con el compromiso de reparar las vías y por eso su deterioro es acelerado.

La falta de planeación y el desgreño administrativo, impiden que el tiempo entre cada invierno sea utilizado para reparar los daños y mucho menos para abocar las nuevas obras que se necesitan. Por eso, transitar por las carreteras colombianas es una aventura de alto riesgo y cada vez se multiplican los accidentes y las víctimas.

Las alternativas

Antes que el capitalismo acabe con la vida en el planeta, es urgente acabar con el capitalismo. Sólo el socialismo posibilitará superar la depredación desarrollista y la construcción de Planes Alternativos de Vida, donde el centro no sea la ganancia y el enriquecimiento, sino la conservación de la naturaleza y la cualificación de la vida.

Pero, antes de que podamos cambiar el sistema capitalista, se debe trabajar por la recuperación de los bosques y selvas. Adelantar planes de reforestación de las cuencas hidrográficas. Devolverle las tierras a los ciclos del agua, a los ecosistemas lacustres y aprender a convivir en las culturas anfibias, como antes lo hacían nuestros indígenas. Es obligatorio adelantar verdaderas revoluciones o reformas agrarias, para garantizar la

producción de alimentos, mediante la agricultura orgánica y en los terrenos apropiados.

Se exige inmediatos reordenamientos territoriales, reubicaciones poblacionales y una nueva estructura democrática en la tenencia de la tierra, pues en Colombia, el 80 por ciento de las mejores tierras se la han apropiado violentamente menos del 1 por ciento de la población. Sólo la violencia narco paramilitar expropió más de 8 millones de hectáreas y desterró más de 5,5 millones de campesinos, mientras 13.000 personas naturales son dueñas de 22 millones de hectáreas.

Buena parte de esos desterrados de ayer, son hoy las víctimas del invierno: en las riberas de los ríos o en las laderas de los barrios de invasión.



CPI OTRO ORGANISMO AL SERVICIO DEL IMPERIALISMO

Autor: Revista Insurrección

La Corte Penal Internacional, fue creada por la ONU en 1998, pero puesta en funcionamiento en 2002, con el propósito de procesar y castigar personas que cometan “los más graves crímenes contra la comunidad internacional (genocidio, crímenes de guerra, crímenes contra la humanidad y agre-

sión)”, siempre y cuando sean delitos cometidos después del 1 de julio del 2002 y el Estado correspondiente no los haya juzgado.

Dentro de los países que se adhirieron al Estatuto de Roma y por lo tanto les cobija dichos reglamentos, está Colombia, quien hizo el salvamento para que la CPI rigiera después del



2009. Entre los que no se adhieren está E.E. U.U. cabe decir, que este organismo depende directamente del Consejo de Seguridad de la ONU.

Una Corte amañada

Slobodan Milosevic, presidente de Serbia, gobernante nacionalista y socialista, impulsor de grandes proyectos para el pueblo serbio, su poder fue usurpado por una oposición, dirigida por el imperialismo yanqui e intervenido militarmente por las fuerzas de la OTAN. Es puesto prisionero después de la guerra de secesión de Kosovo. Fue acusado de crímenes de guerra, crímenes contra la humanidad y genocidio. Lo extraditan para entregarlo a la CPI, que inicia el juicio el 12 de febrero de 2002, lo encerraron en una cárcel y fue encontrado muerto el 11 de marzo de 2006, antes de recibir el veredicto. Pero sus opositores y detractores, leales al imperialismo y protegidos por la ONU a través de la OTAN, los crimina-



les de guerra que fracturaron la antigua Yugoslavia, muchos de ellos están gobernando y que cometieron crímenes contra la humanidad, están en la impunidad.

En Ruanda 1994, se desató una guerra civil entre las etnias Hutus y Tutsis dejando más de 1 millón de muertos Tutsis, en medio de genocidios y crímenes contra la humanidad. Fue una guerra instigada y permitida por tropas de la ONU en cabeza de Francia; la CPI procesó y condenó a varios de los responsables directos de esos crímenes, pero los verdaderos autores intelectuales de dichos crímenes quedaron impunes.

El caso con Israel y sus gobernantes es aberrante; día tras día desde hace más de sesenta



años vienen masacrado a miles de palestinos, entre ellos niños y ancianos, en un genocidio continuado y violando las resoluciones de la ONU. Asesinan a quienes intentan llevarles ayuda humanitaria, ante el brutal bloqueo israelí, como sucedió en 2009, atacando el barco MARMARA, masacrando a 9 trabajadores por los Derechos Humanos, que traían ayuda humanitaria a los palestinos. Ante estos crímenes tan evidentes y rechazados mundialmente, ¿Qué ha hecho la C.P.I. contra los genocidas y criminales de guerra judíos?

Si echamos una mirada a Afganistán, en los bombardeos constantes de la OTAN, supuestamente a los talibanes, han masacrado a cientos de personas, mujeres, niños, y ancianos de la población indefensa. La C.P.I. nada que actúa para aplicar justicia.

En Irak son escandalosas y permanentes las denuncias sobre los crímenes de guerra y crímenes de Lesa Humanidad y el genocidio sobrepasa los tres millones de civiles asesinados, por las tropas imperialistas invasoras, comandadas por los yanquis. Pero, la CPI guarda su silencio

cómplice.

En Libia, se desarrolla una guerra civil donde la OTAN apoya a la oposición y esta con sus bombardeos a supuestas instalaciones militares, ataca zonas residenciales en Trípoli, dejando decenas de muertos y heridos y lo que hace la C.P.I. es emanar órdenes de captura contra el presidente de Libia Muammar Al Gaddafi, su hijo y el jefe de los servicios secretos de Libia, por "crímenes a la población civil", a sabiendas de que la oposición que está actuando contra el gobierno, es una oposición armada y auspiciada por E.E. U.U. y sus aliados.



Reconocimiento político, gobierno con posiciones ambiguas

¿Por qué no ha actuado la C.P.I. contra los gobernantes de Egipto, Emiratos Árabes, Yemén, Bahrein, Arabia Saudita y otros, ante los crímenes y represión de esos gobiernos contra sus pueblos en las llamadas "revueltas Árabes"? Simplemente, porque esos gobiernos son los más fieles aliados del imperialismo yanqui y a ellos no se les puede tocar. Pues varios de estos gobiernos son los que les suministran el petróleo a los EE UU, otros como Arabia Saudita es quién financia las agresiones imperialistas a otros países.

Cinismo a la vista

Qué desfachatez de la CPI, que es otro engendro como la ONU, la OEA y la OTAN entre otros; al servicio del imperialismo y sus aliados del capital, gestores

de la destrucción de grandes pueblos y saqueadores insaciables, que aplica su "justicia" con doble rasero: a sus aliados los deja impunes y a los gobernantes y personalidades de países que gobiernan con un sentido progresista y social para el pueblo, que construyen con otra perspectiva diferente y alternativa, se la aplican por dictamen del imperialismo, siendo éste quien organiza revueltas, asesinatos y demás atropellos en esos países, para tumbar a esos gobiernos legítimos y colocar sus propios titeres.

Si de justicia se trata, porqué ni siquiera se ha pronunciado la C.P.I. contra Uribe Vélez, violador de los Derechos Humanos, criminal de guerra y genocida; auspiciador del narco-paramilitarismo en Colombia y cogestor

de las masacres realizadas por estos grupos; asesinatos políticos; desapariciones y torturas junto con su cúpula militar durante sus gobiernos.

Por estos días está el presidente de la C.P.I. en Colombia, firmando unos acuerdos con el presidente Santos, en los cuales las cárceles colombianas quedan al servicio de la C.P.I., para alojar los condenados por este organismo.

¡Qué paradoja y cinismo!, la C.P.I. haciendo acuerdos con un gobernante violador de los Derechos Humanos. Pero, ante la

solicitud de la mayoría de ONG defensora de Derechos Humanos, de adelantar procesos contra los responsables del genocidio colombiano, el presidente de la CPI responde que ese organismo no tiene injerencia y que cree en la capacidad de la "justicia" colombiana.

Que se abran las cárceles colombianas: para que salgan los 7.500 presos políticos y para que entren a pagar sus penas los gobernantes, militares y paramilitares, responsables del genocidio de las últimas cuatro décadas.

COMUNCIADO

GOLPE ALNARCO PARAMILITARISMO

Autor: Revista Insurrección

El pasado 10 de mayo unidades del EJÉRCITO DE LIBERACIÓN NACIONAL DE COLOMBIA atacó un laboratorio para el procesamiento de cocaína, ubicado en la vereda LEUCHEMA, zona rural del municipio de Villa del Rosario, Norte de Santander.

Este laboratorio pertenecía a una banda narco-paramilitar aliada de la Brigada 30 del Ejército colombiano.

2.- Del enfrentamiento con los narcoparamilitares que custodiaban el laboratorio, nuestra fuerza se replegó sin ninguna novedad luego de la destrucción total del laboratorio. En la

retirada fue atacada por unidades de la Brigada 30.

3.- El E.L.N reitera una vez más, con este hecho y otras acciones de este tipo realizadas anteriormente, evidencia nuestra política de deslinde categórico con el narcotráfico.

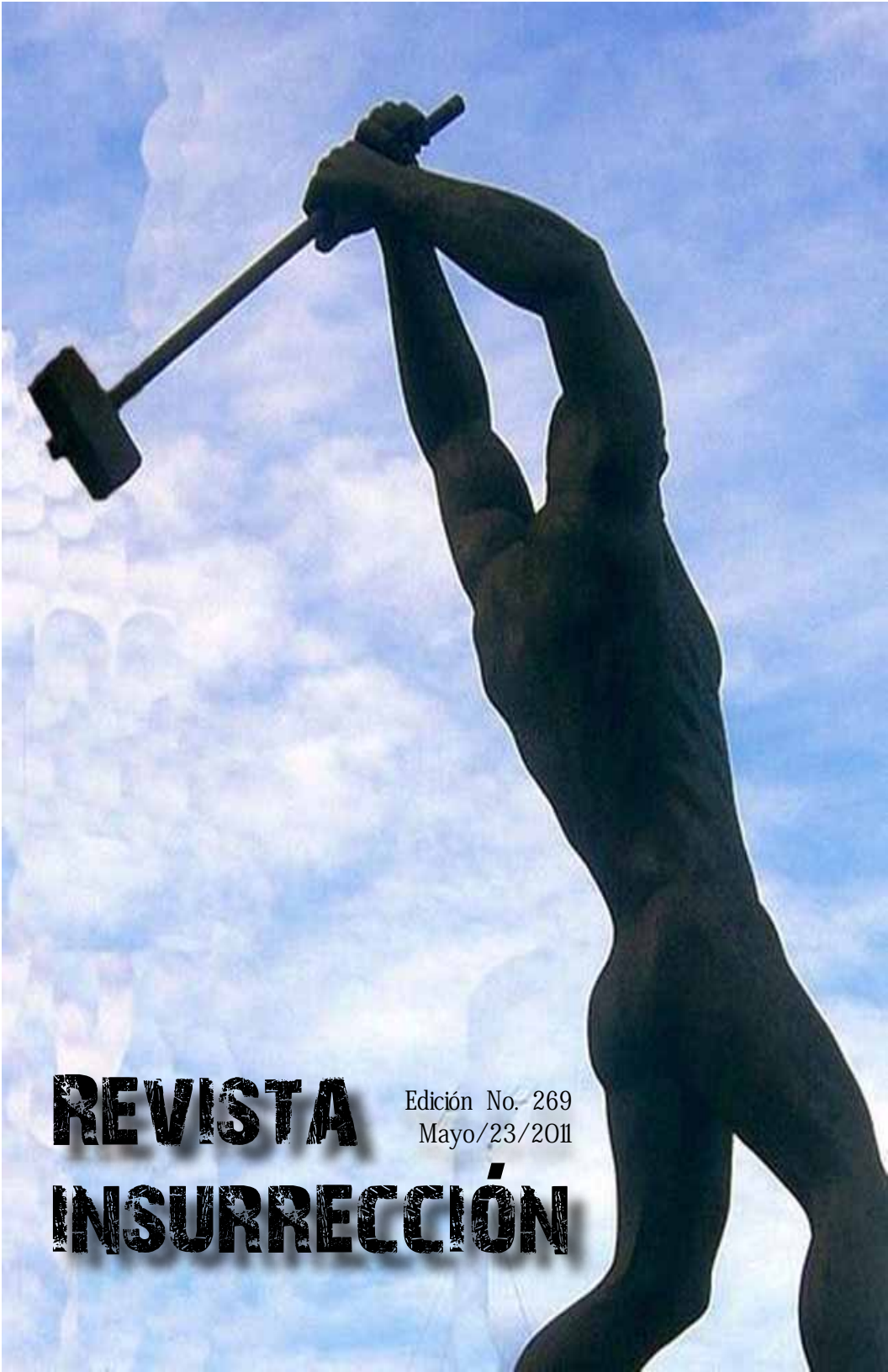
Y desmiente las versiones tendenciosas y perversas que algunos medios de comunicación difunden, acusando al ELN de estar vinculado con el narcotráfico para ilegitimarlo, y con lo que pretenden además encubrir a los reales responsables del narcotráfico en la región, la asociación existente entre paramilitares, unidades del Ejército y la Policía en la zona de Juan Frio y la frontera en general.

4.- Nuestra organización continúa haciendo presencia y confrontando los narco paramilitares y las unidades militares responsables de horriblos crímenes y atropellos contra la población civil, en la frontera colombo-venezolana.

San José de Cúcuta, mayo 11 del 2011.

**FRENTE URBANO
CARLOS GERMAN
VELASCO VILLAMIZAR**





REVISTA

Edición No. 269

Mayo/23/2011

INSURRECCIÓN